Servicio de Política Tributaria
Avda. José Manuel Guimerá, nº 10 - Edf. Servicios Múltiples II Planta 5ª | CP 38003 Santa Cruz de Tenerife | Tfno: 922 475 100

**CONSULTA TRIBUTOS REF**
**CONSULTA Nº 2131 (13/06/22)**

| **PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE** | **DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES** |
|---|---|
| **CONCEPTO IMPOSITIVO**<br>Impuesto General Indirecto Canario | **NORMATIVA APLICABLE**<br>Art. 4.1 Ley 20/1991<br>Art. 5.1 y 5.2 Ley 20/1991 |

**CUESTIÓN PLANTEADA**

La comunidad de propietarios consultante efectúa la gestión y administración de las zonas comunes de un centro comercial. Presta servicios de arrendamiento del aparcamiento.

Consulta textualmente:

- Si la comunidad de propietarios es sujeto pasivo del IGIC en lo que a las cuotas de la comunidad que los comuneros deben aportar mensualmente se refiere, destinadas únicamente a la entera gestión y administración de las zonas comunes del centro.?

- Si los importes correspondientes a las cuotas de la comunidad que los comuneros deben aportar mensualmente, destinadas únicamente a la mera gestión y administración de las zonas comunes del centro, deber ser incrementadas con el IGIC.

- Si la consideración de sujeto pasivo del IGIC solo lo sería en lo referente a su actividad de arrendador del aparcamiento del centro.

**CONTESTACIÓN VINCULANTE**

- La comunidad de propietarios consultante no tiene la consideración de empresario a efectos del IGIC (y, por ende, de sujeto pasivo) en el desarrollo de la actividad de gestión y administración de las zonas comunes del centro comercial, a la que está obligada por la Ley 49/1960.

- Las cuotas periódicas exigible a los copropietarios, por mandato de la Ley 49/1960, para sufragar los gastos generales inherentes a la gestión y administración de las zonas comunes del centro comercial, no constituyen contraprestaciones de operaciones sujetas al IGIC.

- La comunidad de propietarios consultante tiene la consideración de empresario a efectos del IGIC respecto al arrendamiento oneroso del aparcamiento, estando dicha prestación de servicios sujeta y no exenta del IGIC, con obligación de repercutir y declarar las cuotas devengadas. Este hecho implica el carácter dual de la comunidad de propietarios consultante, no empresario respecto a la actividad de gestión y administración de las zonas comunes, y empresario por el arrendamiento oneroso del aparcamiento.

Visto el escrito presentado por en el que formula consulta relativa al Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, IGIC), este centro directivo en uso de la atribución conferida en la Disposición Adicional Décima.Tres de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (en lo sucesivo, Ley 20/1991), en relación con el artículo 21.3. C).l) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por el artículo único del Decreto 86/2016, de 11 de julio, emite la siguiente contestación:

**PRIMERO.-** La comunidad de propietarios consultante efectúa la gestión y administración de las zonas comunes de un centro comercial. Presta servicios de arrendamiento del aparcamiento.

Consulta textualmente:

- Si la comunidad de propietarios es sujeto pasivo del IGIC en lo que a las cuotas de la comunidad que los comuneros deben aportar mensualmente se refiere, destinadas únicamente a la entera gestión y administración de las zonas comunes del centro.?

- Si los importes correspondientes a las cuotas de la comunidad que los comuneros deben aportar mensualmente, destinadas únicamente a la mera gestión y administración de las zonas comunes del centro, deber ser incrementadas con el IGIC.

- Si la consideración de sujeto pasivo del IGIC solo lo sería en lo referente a su actividad de arrendador del aparcamiento del centro.

**SEGUNDO.-** El artículo noveno de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (en adelante, Ley 49/1960), regula las obligaciones de cada propietario destacando, a los efectos de la resolución de la presente consulta, disponiendo su letra e) lo siguiente:

"*1. Son obligaciones de cada propietario:*

*(...)*

*e) Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.*

*(...)*"

Por otra parte, el artículo diez.1.a) de la Ley 49/1960 dispone:

"*1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y*

*vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:*

*a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación*."

De estos preceptos se desprenden dos obligaciones, una de carácter material exigible a la comunidad de propietarios en cuanto a la obligación de los trabajos y obras para el adecuado mantenimiento de las zonas comunes del edificio, y otra de carácter pecuniario en cuanto a la obligación de los propietarios a contribuir a la financiación de los gastos del adecuado mantenimiento de las zonas comunes.

En este punto resulta reveladora la exposición de motivos de la Ley 49/1960 cuando expresa (el subrayado es nuestro): "*Además de regular los derechos y deberes correspondientes al disfrute, la ley se ocupa de aquellos otros que se refieren a los desembolsos económicos a que han de atender conjuntamente los titulares, bien por derivarse de las instalaciones y servicios de carácter general, o bien por constituir cargas o tributos que afectan a la totalidad del edificio. El criterio básico tenido en cuenta para determinar la participación de cada uno en el desembolso a realizar es la expresada cuota o coeficiente asignado al piso o local, cuidándose de significar que la no utilización del servicio generador del gasto no exime de la obligación correspondiente.*"

Es decir, que todos los propietarios están obligados a contribuir al sostenimiento de los gastos del adecuado mantenimiento de las zonas comunes, aunque pudiera no utilizar tales servicios, por ejemplo porque no tenga su residencia en el edificio. Se trata de una obligación de abono aunque no utilice el servicio de mantenimiento de las zonas comunes del edificio.

El artículo 4.1 de la Ley 20/1991 establece la sujeción al IGIC, por el concepto de entregas de bienes y prestaciones de servicios, de aquellas efectuadas por empresarios y profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. Añade el artículo 3.1 del Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la Producción e Importación en las islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio, que la sujeción al Impuesto se produce "*incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen*".

El artículo 19.2 de la Ley 20/1991 establece a su vez, al definir a los sujetos pasivos del IGIC, que tienen la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, careciendo de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando realicen operaciones sujetas al Impuesto.

Asimismo, el artículo 5.1 de la Ley 20/1991, al definir el concepto de actividades empresariales o profesionales, establece como tales "*las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos, o de uno de ellos, con la*

*finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En particular, tienen esta consideración las extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de actividades profesionales liberales y artísticas.*"

Por último, el artículo 5.2 de la Ley 20/1991 dispone que, a efectos del IGIC, se reputarán empresarios o profesionales, por un lado, a las personas o entidades que realicen habitualmente actividades empresariales o profesionales – salvo que realicen exclusivamente operaciones gratuitas – y, salvo prueba en contrario, a las sociedades mercantiles.

Expuestos los principales conceptos legales del Impuesto, queda por delimitar el alcance del elemento subjetivo de la consulta efectuada, la comunidad de propietarios, entendiéndose como tal como aquella comunidad de bienes (definida conforme al artículo 392 del Código Civil) que reúne los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil.

Queda suficientemente fundamentado, en consecuencia, a la vista de la definición del propio hecho imponible del IGIC y de los sujetos susceptibles de conceptuarse como sujetos pasivos del Impuesto, que entre estos pueden incluirse a las comunidades de propietarios. Cuestión diferente es determinar si en todo caso las comunidades de propietarios son siempre empresarios a efectos del IGIC por su propia naturaleza, o por el contrario, puede plantearse la existencia de comunidades de dicho tipo que no han de clasificarse necesariamente como tales por no realizar una actividad empresarial.

De la definición de actividades empresariales o profesionales en el IGIC pueden extraerse ciertos aspectos significativos que pueden ayudar a enmarcar el concepto.

En primer lugar, parece inherente al concepto la existencia de habitualidad en la actividad, - el diccionario de la Real Academia Española, entre otras, define el término "actividad" como "Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad"- por lo que la realización de operaciones aisladas, por ejemplo la ejecución aislada de un acto de comercio, no supone la consideración de la existencia de una actividad comercial. En paralelo, tal consideración se refuerza en cuanto la calificación de empresario o profesional en el IGIC exige la habitualidad en el ejercicio de las actividades, excepto para las sociedades mercantiles, en las que dicha habitualidad se presume legalmente aunque se admite prueba en contrario.

En segundo lugar, podría entenderse que no toda actividad ha de ser calificada como actividad económica a efectos del IGIC. Varios son los factores que pueden apoyar dicha aseveración, la propia terminología utilizada ("factores de producción", "producción", "distribución"…), su atribución de actuar por cuenta propia – que supone la asunción de los riesgos derivados de la actividad - y la existencia de una finalidad concreta (aunque enormemente amplia) de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, parece dar a entender la pretensión legal de particularizar el alcance de la definición de "actividades económicas" a efectos del IGIC, pudiendo entenderse, por tanto, la existencia de otras actividades que, si bien se realizan con la puesta en común del esfuerzo personal y la asignación de medios materiales, no tienen como finalidad la intervención en la producción o distribución de bienes o servicios. Tal es el caso de los entes públicos que actúen exclusivamente en el desarrollo de actividades u operaciones en el ejercicio de sus funciones públicas y actuando como autoridad pública, en los que, independientemente de que tal actuación suponga la ordenación de medios personales y materiales con habitualidad, la finalidad de la misma es distinta a la intervención en la producción o distribución de bienes o servicios.

La cuestión se centra, en consecuencia, en analizar si la actividad propia de las comunidades de propietarios, exclusivamente realizada para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 49/1960, tiene la consideración de una "actividad económica" a efectos del IGIC.

Las comunidades de propietarios encuentran su marco legal en la citada Ley 49/1960. Pretende dicha regulación legal establecer el marco de convivencia entre los diferentes titulares de pisos o locales de un inmueble, para lo que, entre otros aspectos, instituye unos órganos de gobierno y administración – artículo trece de la Ley 49/1960 – y una capacidad financiera – artículo nueve.1.e) de la citada Ley – lo que supone la existencia de los elementos organizativos propios del concepto de empresario o profesional a los efectos del IGIC.

No obstante, la necesidad de la existencia de una regulación legal de la comunidad de propietarios a que se refiere la Ley 49/1960 no se genera en la pretensión de los comuneros de participar en la producción o distribución de bienes o servicios, sino en permitir un marco de convivencia armónico, "*para así dejar establecidas las bases de una convivencia normal y pacífica*" como se menciona en la exposición de motivos de la propia Ley 49/1960.

La comunidad de propietarios se limita a la distribución del gasto común habido como consecuencia de los trabajos y las obras necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, y al cobro a los mismos de las cantidades necesarias para satisfacer dichos gastos. No presta la comunidad de propietarios ningún otro servicio al copropietario distinto del de cobro de las cuotas y atendimiento del adecuado mantenimiento del edificio, sus servicios e instalaciones. Ni en la Ley 49/1960 ni en el Código Civil se contempla la exigencia a los copropietarios del pago de una cantidad a la comunidad por los servicios que ésta presta distintos del necesario para hacer frente a los gastos de mantenimiento del edificio, sus servicios e instalaciones, por lo que dicha gestión por parte de la comunidad de propietarios no tendrá nunca el carácter de onerosa.

Conforme a todo lo expuesto, una comunidad de propietarios no tiene la consideración de empresario o profesional a efectos del IGIC (y, por ende, de sujeto pasivo) en el desarrollo de la actividad de gestión y administración de las zonas comunes del edificio.

El que una edificación tenga la condición de centro comercial donde se ubican locales comerciales en la que se ejercitan distintas actividad económicas, no implica por sí misma la consideración de empresario o profesional de la comunidad de propietarios por la mera gestión y administración de las zonas comunes del edificio; en este sentido, no existe diferenciación entre locales, oficinas y viviendas en cuanto a las obligaciones de los copropietarios para con el deber de contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización, ni en ningún otro aspecto regulado en el Código Civil o en la Ley 49/1960.

Por tanto, las cuotas periódicas exigibles a los copropietarios para sufragar los gastos generales inherentes a la gestión y administración de las zonas comunes del centro comercial, no constituyen contraprestaciones de operaciones sujetas al IGIC.

Se señala en el texto de petición de emisión de consulta que la comunidad de propietarios presta servicios de aparcamiento con carácter oneroso.

El artículo 5.4.a) de la Ley 20/1991 dispone:

"*Se considerarán, en todo caso, empresarios o profesionales a quienes efectúen las siguientes operaciones:*

*a) La realización de una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.*

*En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes y quienes constituyan, amplíen o transmitan derechos reales de goce o disfrute sobre bienes inmuebles.*"

Derivado de este precepto, tendrá la consideración de empresario, a efectos del IGIC, la comunidad de propietarios consultante por el arrendamiento oneroso del aparcamiento, por tratarse de actividades distintas de las de la mera gestión y administración de las zonas comunes del edificio.

La condición de empresario de la comunidad de propietarios consultante por el arrendamiento oneroso del aparcamiento, implica su consideración de sujeto pasivo (artículo 19.1.1º de la Ley 20/1991), con obligación de repercutir el IGIC (artículo 20.Uno de la Ley 20/1991 y al tratarse de prestaciones de servicios sujetas y no exentas) por el devengo del IGIC (cuando resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción derivada del arrendamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.Uno.6º de la Ley 20/1991), con obligación de declarar las cuotas devengadas y de cumplir las obligaciones formales previstas en el artículo 59 de la Ley 20/1991 y desarrolladas en el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por el Decreto 268/2011, de 4 de agosto.

**TERCERO.-** De acuerdo con lo expuesto, es criterio vinculante de este centro directivo que:

- La comunidad de propietarios consultante no tiene la consideración de empresario a efectos del IGIC (y, por ende, de sujeto pasivo) en el desarrollo de la actividad de gestión y administración de las zonas comunes del centro comercial, a la que está obligada por la Ley 49/1960.

- Las cuotas periódicas exigibles a los copropietarios, por mandato de la Ley 49/1960, para sufragar los gastos generales inherentes a la gestión y administración de las zonas comunes del centro comercial, no constituyen contraprestaciones de operaciones sujetas al IGIC.

- La comunidad de propietarios consultante tiene la consideración de empresario a efectos del IGIC respecto al arrendamiento oneroso del aparcamiento, estando dicha prestación de servicios sujeta y no exenta del IGIC, con obligación de repercutir y declarar las cuotas devengadas. Este hecho implica el carácter dual de la comunidad de propietarios consultante, no empresario respecto a la actividad de gestión y administración de las zonas comunes, y empresario por el arrendamiento oneroso del aparcamiento.

La presente consulta se emite conforme a la legislación vigente a la fecha de firma de la misma y a los efectos que establece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de junio de 2022

**EL VICECONSEJERO DE HACIENDA, PLANIFICACIÓN Y ASUNTOS EUROPEOS**

Fermín Delgado García